

Posicionamiento de INCIDE Social con relación a la reforma al Artículo 17 de la Constitución que establece la figura jurídica de acciones colectivas.

La constante violación a los derechos humanos de las y los consumidores crea la necesidad de construir medios jurídicos de defensa y protección desde la ciudadanía, las acciones colectivas se convierten en un mecanismo constitucional para disuadir a proveedores públicos y privados de seguir incurriendo en abusos, es una posibilidad de acceder a la justicia colectivamente para denunciar la falta de protección del Estado ante las arbitrariedades de las corporaciones.

Transformar las relaciones asimétricas de intereses privados sobre los públicos y ciudadanos a favor del bien común es responsabilidad del Estado Mexicano, ante las prácticas monopólicas que transgreden los derechos de las y los consumidores violentando el derecho de tener una vida digna.

Las afectaciones a las personas y la falta de procesos de demanda ágil generó la movilidad y articulación de la sociedad civil, para crear esfuerzos de incidencia ciudadana en la construcción de herramientas que posibilitaran la incorporación de una figura jurídica constitucional como las acciones colectivas, las cuales facilitan el acceso a la justicia, permitiendo la representación de las personas afectadas, a través de colectividades u organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de agilizar los procesos de exigencia de la reparación del daño, corrigiendo prácticas arbitrarias que afecten los derechos colectivos.

El impulsar esta reforma constitucional¹ dio como resultado, la visibilización del trabajo de la sociedad civil en materia de derechos del ciudadano como consumidor, la capacidad de generar espacios de diálogo y conciliación sobre la importancia de otorgar certidumbre jurídica a los derechos colectivos que evitan que las personas como consumidores de productos y servicios en su cotidianidad sean afectadas.

Queda acentuado que la capacidad de articulación de las organizaciones de la sociedad civil genera métodos que permiten construir ciudadanía, desde un enfoque de derechos y que ha generado avances significativos como el amparo colectivo de los y las consumidores.

El gran reto es hacer efectiva esta figura jurídica que permite la defensa, protección y representación de los derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad para demandar violaciones a los derechos, ahora es responsabilidad tanto de la ciudadanía como de la sociedad civil, de los actores políticos, económicos, órganos autónomos, instituciones y autoridades, impulsar leyes secundarias, que consoliden la figura de acciones colectivas y mecanismos de defensa efectivos del ejercicio de las mismas como contribución a la vida democrática del país.

¹ La iniciativa de decreto que reforma el artículo 17 constitucional fue aprobada con 319 votos a favor y una abstención en la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2010.